

Capítulo sexto

El posacuerdo en Colombia y los nuevos retos de la seguridad

José Alejandro Cepeda

«Hacer la guerra es más fácil que hacer la paz».

Barack Obama

Resumen

El siguiente texto ofrece una reflexión general de la perspectiva en materia de seguridad que enfrenta Colombia a partir de la eventual concreción del proceso de paz que desarrolla con la guerrilla las FARC, con el cual se daría fin a un conflicto armado de orden revolucionario de más de medio siglo de duración. Esta fase posterior en la evolución del conflicto, entendible como un posacuerdo, conduciría idealmente a una situación de posconflicto donde la construcción de la paz *–peacebuilding–* estaría condicionada entre varias variables y desafíos de política pública por un reordenamiento de la agenda de seguridad de la nación, con consecuencias tanto a nivel doméstico como externo.

Palabras clave

Colombia, proceso de paz, FARC, posacuerdo, posconflicto, seguridad.

Abstract

The following text provides a general reflection of the perspective on security challenges that face Colombia due to the eventual completion of the current peace process with the guerrilla group FARC. This peace process

would finally put end on a revolutionary armed conflict that last more than half a century. This later stage in the evolution of the conflict, understood as a post-agreement, ideally lead to a situation of post-conflict where the peace-building would be conditioned among several variables and policy challenges, reordering the security agenda of the nation, with consequences both on domestic and external context.

Key words

Colombia, Peace process, FARC, Post-agreement, Post-Conflict, Security.

Introducción

El jueves 4 de febrero de 2016 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que solicitaría a su Congreso 450 millones de dólares con miras a apoyar en 2017 el denominado posconflicto en Colombia, país que en los últimos 50 años ha sido escenario de uno de los conflictos armados internos más persistentes de América Latina y del mundo. El plan en que serán invertidos los recursos, bautizado Paz Colombia, implica la evaluación y superación del Plan Colombia, que en los últimos quince años hizo énfasis en la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y colateralmente frente a la guerrilla, con un costo aproximado de 9 billones de dólares (*Semana*, 2016b).

El anuncio de Obama, realizado en un encuentro en Washington en la Casa Blanca en el que el principal invitado fue el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, coincide con la expectativa que produce el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), previsto inicialmente para marzo de 2016 y en espera de concretarse. «Al igual que Estados Unidos ha sido socio de Colombia en tiempos de guerra, seremos su socio en la realización de la paz», afirmó Obama (*Semana*, 2016a). Santos agradeció y anotó: «Si en Colombia estamos cerca de lograr un acuerdo de paz, podemos decir, sin lugar a dudas, que el Plan Colombia ha sido un aporte fundamental para llegar a este punto» (*BBC*, 2016).

Si nos atenemos a lo prometido, este encuentro diplomático se puede entender como la oficialización de una nueva era, en la que Colombia con el respaldo de su principal socio en materia de seguridad pretende definitivamente dejar atrás los tiempos de la guerra para proyectar un nuevo país hacia dentro y hacia afuera de sus fronteras. Paz Colombia, presentado como una consecuencia triunfal de su predecesor, será una versión del Plan Colombia en un contexto de mucha menor intensidad del conflicto interno, sobre la expectativa de que tras más de tres años de negociaciones con las FARC se superaría una situación que ha cobrado la vida de más de 220.000 personas y producido más de 7 millones de víctimas¹.

Todo esto lleva a preguntarnos: ¿Cuáles son los retos para el establecimiento de la paz que encara Colombia tras el posacuerdo? ¿Cuáles son los cambios desde la perspectiva de la seguridad que implica el posible posconflicto? ¿Cuáles serían las modificaciones en la agenda interna y externa colombiana en materia de paz y seguridad en el futuro?

¹ Véase el informe: *¡Basta ya!* del Grupo de Memoria Histórica (2013). Según este las cerca de 220.000 muertes violentas de los últimos 50 años se concentran en el último cuarto de siglo, siendo la mayoría de víctimas civiles que además engrosan las cifras de millones de desplazados y despojados de sus tierras. Disponible en <<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/>>.

Conflicto con la guerrilla más antigua del mundo

Marzo de 2016 se convirtió de antemano en un importante mes para Colombia, pues en la segunda mitad del año anterior se anunciaron dos eventos de magnitud, diferentes, que primaron en la opinión pública: por un lado la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC para el día 23 y, por otro, previsto para días antes, el 10, un concierto de los Rolling Stones por vez primera en su capital, Bogotá. Aunque este último asunto pudiera parecer banal, refleja parte de la realidad colombiana. Las FARC y el grupo inglés datan de la misma época, comienzos de la década de 1960, y tienen medio siglo ininterrumpido de existencia. Si los Rolling Stones son el grupo musical en funciones más importante de la cultura pop, las FARC son la guerrilla más antigua del mundo.

La firma del acuerdo se pospuso por razones prácticas y políticas en medio de la alta polarización que vive el país entre quienes están a favor (una coalición de partidos liderada por el gobierno y buena parte de la ciudadanía, sumados a un respaldo unánime de la comunidad internacional), frente a una férrea oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático². Pero el concierto se realizó. Más de 40.000 espectadores llenaron el estadio de fútbol El Campín, demostrando la capacidad de gasto de muchos colombianos y situando el evento como una prueba más de una posible nueva cara amable del país, pues tan solo una década atrás hubiera sido impensable su realización en el que se llegó a denominar el país más violento del mundo y candidato insistente a «Estado fallido»³. Un país que se encontraba aislado en sí mismo. Sin embargo, al margen de la distracción cultural, los problemas de pobreza que aquejan a cerca del 40% de colombianos siguen allí, y la firma de un acuerdo, aunque aún previsible con la guerrilla, quedó aplazada. La paz debió esperar una vez más.

¿Cómo se llegó a esta situación? Una síntesis del diagnóstico colombiano es la combinación de dos factores sorprendentes: una relativa estabilidad institucional que cataloga a la nación como una de las democracias más antiguas de América, donde el relevo presidencial es costumbre y los dictadores escasos, pero donde a la vez el Estado no ha podido hacer presencia

² Ejemplifica esta oposición al proceso de paz el que desde el mes de junio el uribismo ha estado adelantando un proceso de recolección de firmas con el fin de oponerse al plebiscito por la paz con el que se refrendarían los acuerdos de La Habana con las FARC. Uribe y su partido con amplia bancada en el Congreso han ido más allá, y no exentos de polémica han autodenominado «resistencia civil» su posición contra el gobierno.

³ El índice de Estados fallidos, liderado por la revista *Foreign Policy*, sin embargo, no deja de ser polémico por la posible generalización de sus análisis o la falta de contextualización. Véase en cuanto a Colombia y América Latina precisiones como la que ofrece Geoffrey Ramsey (2011): «El Índice de Estados Fallidos de Foreign Policy se equivoca en América Latina», disponible en, <<http://es.insightcrime.org/analisis/el-indice-de-estados-fallidos-de-foreign-policy-se-equivoca-en-america-latina>>.

efectiva en todo su territorio desde que inició su aventura republicana hace dos siglos. En palabras de Fernán González (2003), se trata de un país con una presencia diferenciada del Estado, donde la alta heterogeneidad geográfica y cultural se combina en velocidades históricas contrastantes, en la que departamentos como Antioquía, Santander, Valle del Cauca, Atlántico o Cundinamarca pueden llegar a exhibir cifras económicas, por encima incluso del promedio de América Latina, mientras que otros muestran índices de pobreza extrema como Chocó, Guajira o Cauca. Los índices de seguridad, y la estabilidad o inestabilidad del orden público se mezclan aleatoriamente entre estas características, por ciudades y subregiones⁴.

Desde el punto de vista ideológico, la exclusión política se acrecentó dentro de los parámetros de la Guerra Fría, al tiempo que la violencia de mitad de siglo XX enfrentaba a seguidores de los partidos Liberal y Conservador, el primero más proclive a las reformas sociales y el segundo defensor del *status quo*. Mientras esto sucedía y el país intentaba modernizarse, florecían las guerrillas alentadas por la revolución cubana de 1959. Las FARC serían la primera de una serie de guerrillas móviles que se consolidarían, cada una por su cuenta, en diversas regiones de Colombia, siendo además las más influyentes el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –aún existente–, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19). Estas dos últimas participaron en el proceso de paz más exitoso hasta la fecha, concretado entre 1990 y 1991, permitiéndoles hacer parte de la redacción de la Constitución de 1991 tras la elección democrática de una asamblea constituyente, la cual prometió una paz que no se ha concretado.

Las FARC, que cuentan con cerca de 8.000 militantes y llegaron en su apogeo a doblar esa cifra en la década de 1990, es una guerrilla de origen rural cuyo discurso inicial respondía a la previa autodefensa de grupos campesinos frente a la violencia de orden militar y paramilitar impulsada por el Partido Conservador, agudizada tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Estos hechos, que provocaron una gran ola de violencia con cerca de 300.000 muertes entre las décadas de 1940 y 1950, se conocen como *La violencia*. Dieron paso a la breve dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y desembocaron en el acuerdo del Frente Nacional (1958-1974), un sistema de alternación política entre liberales y conservadores pactado en las costas españolas de Sitges y Benidorm por los líderes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, el cual fue desmontado de forma paulatina, prácticamente hasta los días de la nueva constitución.

El caso de Colombia respecto a la guerrilla considerable según el instituto de estudios sobre guerra y conflicto de la Universidad de Hamburgo Arbeits-

⁴ Respecto a las 50 ciudades más peligrosas del mundo, entre las que se encuentran cinco en Colombia, véase: «Cinco ciudades de Colombia están entre las más peligrosas del mundo», *Vanguardia* (2015), disponible en <<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/295977-cinco-ciudades-de-colombia-estan-entre-las-mas-peligrosas-del-mundo>>.

gemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) como una «guerra antirrégimen»⁵, de mediana o baja intensidad pero prolongada en el tiempo, mutó con el paso de las décadas; pasando de reducidos puntos geográficos a expandirse en diversos frentes y a beneficiarse de los recursos del secuestro o el narcotráfico para ampliar su financiación y alcance. Esta relación con el narcotráfico acercó a la guerrilla a considerársele un cartel internacional. Las FARC, sin que dejaran de ser un actor político de importancia, degeneraron en actividades terroristas que empañaron sus ideales y contrariaron la reivindicación de una reforma agraria.

De Uribe a Santos: cambio de estrategia

A pesar de que el conflicto armado en Colombia se ha intensificado a lo largo de medio siglo, no existe un gobierno que no haya intentado negociar –confidencial o abiertamente– con los actores insurgentes. Sobresalen los intentos de paz no concretados bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1984) con el M-19 y las FARC, guerrilla que dentro de su estrategia de «combinación de las fuerzas de lucha» creó la Unión Patriótica, parcialmente su brazo político en las décadas de 1980 y 1990, del cual se calcula que cerca de 3000 militantes fueron asesinados por la extrema derecha. Este cortocircuito entre las intenciones revolucionarias y la lucha electoral radicalizarían a la guerrilla, presionada por la espiral de violencia que a la vez produjo el fortalecimiento del paramilitarismo.

El conservador Andrés Pastrana (1998-2002) optaría por desmilitarizar un amplio territorio al sur del país en la zona de El Caguán, para dar pie a unos dilatados diálogos que fracasarían por su improvisación y la escasa voluntad de negociación de la guerrilla. Con el arribo de Álvaro Uribe a la presidencia (2002-2010) y un cambio pendular radical de política que haría énfasis en la presencia incondicional de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, bajo el lema «seguridad democrática», las FARC se verían seriamente diezmadas. Uribe, quien además sería reelegido mediando una coyuntural reforma constitucional, favoreció negociaciones puntuales con los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron en buena medida, aunque hasta el presente continúan operando diversos grupos criminales residuales que han sido ambiguamente denominados como Bandas Criminales o BACRIM (Sierra, 2011).

El cambio decisivo llegaría con Juan Manuel Santos, elegido y reelegido para el periodo (2010-2018), quien de ex ministro estrella de defensa de Uribe y

⁵ La información de AKUF respecto a sus definiciones conceptuales y en torno a Colombia está disponible en <<http://www.wiso.uni-hamburg.de/de/fachbereiche/sozialwissenschaften/forschung/akuf/akuf/kriegsdefinition-und-kriegstypologie/>> y <<http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/sozialwissenschaften/forschung/akuf/kriege-archiv/lateinamerika/kolumbien/>>.

ostentadamente denominado su candidato pasó a ofrecerle al país un nuevo movimiento pendular, esta vez hacia la negociación contrariando a su mentor. Si el discurso de Uribe era –y es– el de la guerra, el de Santos como presidente ha sido el de la paz. Aunque Santos es considerado el arquitecto de los golpes más importantes a las FARC de los últimos años, incluyendo la liberación de secuestrados entre los que se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2008 en la denominada «Operación jaque», estimada como una exitosa operación de inteligencia en Colombia sin antecedentes similares, o el haber dado de baja al comandante guerrillero Alfonso Cano en 2010, su lectura de los hechos fue pragmática: la correlación de fuerzas había cambiado y las FARC, forzosamente, aunque no derrotadas, se encontraban lo suficientemente debilitadas para tener que negociar.

FARC y ELN: ¿una sola paz para Colombia?

Una importante novedad ha sido el anuncio del gobierno de Juan Manuel Santos, en marzo de 2016, de haber acordado una agenda de negociación de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El ELN, activo desde la década de 1960, es un grupo insurgente de original inspiración y apoyos cubanos, tercamente liderado por una violenta estructura federada que cuenta con cerca de 1500 combatientes, muchos menos que los de las FARC. Si bien las FARC tienen un orden más centralizado, el ELN al poseer una naturaleza fragmentada podría presentar mayores problemas para hacer avanzar los diálogos, y de paso vencer el escepticismo que produce en la opinión pública por cuenta de su aún notable influencia sobre el norte de Colombia hacia la frontera compartida con Venezuela (esta subregión colombiana, conocida como Catatumbo y ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander hacia la Cordillera Oriental de Colombia, es una de las zonas que más concentra actores ilegales en el país y una de las prioridades en materia de seguridad). Así lo demostró con el secuestro de la periodista colombo-española Salud Hernández Mora, corresponsal de los diarios *El Mundo* y *El Tiempo*, durante el mes de mayo junto a dos de sus colegas⁶.

Los diálogos exploratorios con el ELN, guardados en secreto por el Gobierno, como lo hizo previamente con las FARC, continuarían con negociaciones en Ecuador, Brasil, Chile, Venezuela y Cuba, países garantes además de Noruega (respecto a las FARC, los garantes son Cuba y Noruega, acompañados por Venezuela y Chile). La agenda de las FARC contempla seis puntos: *desarrollo agrario integral, participación política, fin de cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación*. La del ELN igualmente

⁶ Véase *El Mundo* (2016): «Liberada la periodista Salud Hernández-Mora: "El secuestro ha sido un error gravísimo del ELN"» en <<http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/27/5748b5e022601d09788b4597.html>>.

seis: participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto e implementación.

Es prematuro predecir el rumbo de las negociaciones con el ELN, pero idealmente se esperaría que junto a las de las FARC fuesen dos procesos de paz y un solo fin del conflicto armado en Colombia. Por ahora la expectativa se centra en la posible confluencia de estos dos procesos a futuro, y el eventual cambio de las armas por votos como partidos políticos de izquierda que podrían allanar el camino a una paz estable. De salir bien, esta sería la vía para dejar atrás la persistente violencia política del último medio siglo.

¿Posconflicto o posacuerdo?

En la última década la conflictividad en Colombia cambió, como lo registró Carsten Wieland (2008) comentando diez tesis en las que exponía el *sui generis* proceso en el que el país había avanzado hacia un posconflicto en medio del conflicto. Según Wieland, se trataba de un mejor equilibrio del ejercicio de la seguridad a favor de la recuperación de la presencia del Estado (haciendo caso a la vieja condición weberiana sobre el monopolio de la fuerza), obligando a las FARC a replegarse, al tiempo que se adelantaban negociaciones con grupos paramilitares, para finalmente destrabar las concernientes a la guerrilla.

El actual proceso de paz ha puesto en el tapete situaciones novedosas, como el desarrollo de una Ley de Víctimas, un debate sobre justicia transicional, el rol de dichas víctimas, su reparación, la importancia de la memoria histórica y la función de un eventual perdón. La manera como se entregarán las armas de los insurgentes, la referendación plebiscitaria y el ajuste constitucional de los acuerdos aún son temas de debate y polarización, pero han generado la impresión de que Colombia avanza inexorablemente a un posconflicto. ¿Por qué entonces es más acertado en primera instancia, por ahora, hablar de un *posacuerdo*?

La respuesta reside en que la paz –una paz estable y duradera– requiere de una construcción adicional, que va más allá de la ausencia del conflicto. Este proceso de ajuste, reconciliación, revaloración humanista y reencuentro del proyecto nacional no puede ser una paz incompleta. Una paz en la que parte de la clase política (como lo ha señalado el mundo académico desde hace años) ha aceptado públicamente por primera vez, siguiendo los conceptos de estudiosos de los conflictos como Johan Galtung (1969), que un acuerdo con las FARC implicaría un importante avance, pero se limitaría a una «paz negativa», en el sentido de que finiquitar la violencia armada es la puerta para avanzar en el posconflicto donde habría que trabajar a favor de una «paz positiva», en la que estructuralmente las condiciones mínimas de desarrollo y justicia para la mayoría de colombianos deben ser garantizadas. En esa medida la firma de la paz significa –a pesar de su gran valor– apenas

el arribo del posacuerdo, más no necesariamente el del posconflicto, en el cual la reconstrucción del país puede demorar tanto como el conflicto armado experimentado. De esta forma, la elaboración de un *peace-building* para Colombia implica pasar por la reafirmación del Estado de derecho, sin descuidar la garantía del concepto de seguridad humana en todo el territorio.

Antes de comentar más aspectos de lo que sería el escenario posacuerdo para construir el posconflicto, vale la pena listar los puntos y retos que deja para el país la hoja de ruta de negociación que ha sostenido Colombia con las FARC. Teniendo en cuenta «ampliar la democracia» y construir «bases sólidas para la paz», se estableció que si el acuerdo de paz con esta guerrilla se completa, las siguientes políticas deberán realizarse (*El Tiempo*, 2012):

- (1) Política de desarrollo rural para el 46% de los 11 millones de campesinos que se calculan están en la pobreza (reforma agraria con búsqueda de propiedad y seguridad alimentaria).
- (2) Participación política: se buscará incentivar «mayor participación en la política nacional, regional y local para todos los sectores, especialmente los más vulnerables» y «acceso a los medios de comunicación» para los eventuales movimientos que surgieran de un eventual proceso de paz exitoso.
- (3) Fin del conflicto: «cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo», «dejación de armas y reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses», intensificar el combate de las «organizaciones criminales y sus redes de apoyo», así como esclarecer los reales alcances del fenómeno paramilitar en el país.
- (4) Drogas ilícitas: «sustitución con planes de desarrollo», «solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos».
- (5) Víctimas: aclarar el destino y los responsables de las muertes violentas y las violaciones de derechos humanos en el conflicto.

Una de las especificaciones más importantes que ha repetido el presidente Juan Manuel Santos desde el inicio de la negociación, es que «nada está acordado, hasta que todo esté acordado». Esto significa que aunque los puntos anteriores se negocien, uno por uno, aunque no necesariamente en ese orden, solo con la firma del acuerdo y su reafirmación final que se espera por parte de la ciudadanía estaría sellado el proceso de paz. En todo caso uno de los éxitos de la administración Santos ha sido lograr aprobar de forma unánime que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realice la veeduría de la última etapa del proceso. En pocas ocasiones ese organismo ha aprobado una resolución sobre la materia, pero casi nunca lo ha hecho con consenso total. Para conseguirlo, el presidente contactó a cada uno de los gobernantes de los países miembros del Consejo de Seguridad y personal o telefónicamente habló con Barack Obama, Vladimir Putin, el primer ministro británico David Cameron, el presidente francés François Hollande y el presidente de China Xi Jinping, asegurando no solo la aprobación, sino que

se hiciera dentro de los parámetros definidos para el campo de acción que podría tener la misión de las Naciones Unidas en Colombia.

Desmovilización de la guerrilla

La implementación del proceso de paz, de acuerdo al tercer punto del acuerdo, implica desafíos complejos, pues supone la reinserción y desmovilización de los combatientes, que si no se reintegran debidamente en la sociedad inciden en la continuación de la violencia por exclusivos fines económicos, como lo hacen las mafias del narcotráfico, o posiblemente como reductos insurgentes, como sucedió con el Movimiento Jaime Báteman Cayón en el caso del M-19 en la década de 1990. En esa medida, la suspensión del carácter ideológico del conflicto supone nuevos retos para la seguridad en el país y la paulatina preparación para un nuevo rol de la Fuerzas Públicas del Estado colombiano.

Según Daniel Pardo (2014), la discusión sobre desarme y desmovilización debió preceder el análisis de la participación política que se abordó primero en los diálogos de La Habana, para poder proponer una sólida política de reintegración. Pardo distingue principalmente dos posiciones contrapuestas: 1) la del gobierno, que sugiere la entrega de todas las armas como condición necesaria para aplicar el Marco Jurídico para la Paz (declarado exequible por la Corte Constitucional) y en consecuencia para garantizar la reintegración política, social y económica de la guerrilla; y 2) la de las FARC, que plantea la dejación paulatina pero no la entrega total e inmediata de sus arsenales.

Esta tensión ha hecho recordar que justamente la condición principal para que los miembros de la guerrilla regresen a la vida civil es que abandonen las armas. Por su parte el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto De la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, han reiterado que la dejación definitiva de las armas es un paso innegociable para que la guerrilla pueda convertirse en una fuerza política, ajena por completo a la violencia aunque protegida por el Estado a partir de su desmovilización.

Sin embargo uno de los mensajes que aún aspiran a proyectar las FARC es el no haber sido derrotadas militarmente, por lo cual pretenden que las armas se depongan, más no se entreguen. El cardenal Rubén Salazar, en representación de la Iglesia Católica, ha resaltado una vez más que para que las ideas puedan ser defendidas sin violencia, las armas deben entregarse físicamente. En este sentido, solo una misión internacional de los países garantes y acompañantes del proceso de paz y la supervisión de Naciones Unidas podrán hacerse cargo del tema. Lo más importante, al margen, es que esas armas jamás vuelvan a utilizarse para alimentar el conflicto colombiano o el de otra parte del mundo.

La posición de las FARC, para lo que han recibido asesoría de excombatientes de otros países, parece estar inspirada en el caso de Irlanda del Norte, donde

el IRA no se desarmó inmediatamente y no hubo una ceremonia pública de entrega de armas. Sin embargo líderes de las FARC, como alias Timochenko, admiten que la búsqueda de la paz pasa por un adiós a las armas. Otras cabezas de esta guerrilla, como alias Andrés París, han propuesto polémicamente que en caso de concretarse un proceso de dejación de armas el Estado tendría que efectuar de manera complementaria un desmonte parcial de su pie de fuerza, cercano a 500.000 hombres, citando las experiencias de Guatemala y El Salvador, donde las fuerzas militares experimentaron profundas transformaciones llegada la paz.

Respecto a la desmovilización, el Ministerio de Defensa en Colombia ha calculado que los miembros de las FARC podrían ascender a 9.000, y que se quiere aprender del caso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno Uribe, en el cual hubo subestimación de otros componentes como las redes de apoyo logístico y algunas milicias urbanas, lo que podría hacer que los actores violentos que rodean las operaciones de las FARC llegasen indirectamente a 20.000 hombres. Como lo recuerda Daniel Pardo, ante esta cifra descomunal la Fiscalía General de la Nación manifestó en su momento que el ente acusador no cuenta con los recursos jurídicos ni con la infraestructura para afrontar un eventual proceso de desmovilización colectiva, algo que no fue tenido en cuenta en el proceso con las AUC, con las consecuencias negativas de formación de las BACRIM. Ante este desafío, se supone que el proceso de desmovilización deberá cobijar a los militantes reconocidos por las FARC, a la par que el Estado Colombiano tendrá que proteger los derechos humanos en todas las zonas de influencia de la guerrilla –incluidos los desmovilizados a futuro–, evitar la impunidad y prepararse legalmente para el posconflicto.

A pesar de las dificultades que enfrentaría la desmovilización en aspectos judiciales, educativos, salidas laborales y apoyos psicológicos para los excombatientes –lo que demanda atención adicional en algunos casos cuando los miembros de las filas son jóvenes e incluso menores de edad que fueron reclutados desde niños–, Colombia cuenta con más de una década de experiencia en procesos de reintegración voluntaria y coordinada por el Estado. A ello se suma que para la etapa de *peacebuilding* y la reintegración económica buena parte del empresariado ha manifestado su apoyo, ofreciendo puestos de trabajo o patrocinando proyectos productivos, además del respaldo que ha manifestado la comunidad internacional a Colombia para su posconflicto⁷.

⁷ El apoyo a la búsqueda de la paz en Colombia en la comunidad internacional ha sido importante, desde el significativo respaldo inicial del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (con quien existieron amplias tensiones por parte del presidente Álvaro Uribe justamente por supuestos apoyos a las FARC en su territorio), tras una ronda de diálogos con las FARC en Noruega, incluyendo declaraciones de mandatarios del resto de América Latina hasta una de Vladimir Putin de Rusia. Países ubicados en el oriente, como China o Japón, han venido sumando su respaldo.

Además del plan Paz Colombia que apoyan los Estados Unidos, particularmente la Unión Europea (UE) ha manifestado su apoyo incondicional desde el comienzo, y en mayo de 2016 aprobó un nuevo aporte de 575 millones de euros (unos 643 millones de dólares) para apoyar la implementación de los acuerdos. En visita a Bogotá, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, firmó además cuatro acuerdos de cooperación relacionados con la consolidación de la paz. Tras reunirse con el ministro consejero para el posconflicto de Colombia, los derechos humanos y la seguridad, Rafael Pardo, Mogherini afirmó: «Estamos convencidos de que en conjunto, también vendrá una oportunidad de crecimiento para el país y de creación de trabajo para las personas, eso es lo que también quiere acompañar la UE». La funcionaria explicó que la UE quiere invertir en la paz porque es la mejor opción para el mundo, y que «lo más importante es el apoyo político que la UE le ha dado a Colombia, que se está dando y se seguirá dando».

La UE detalló que el millonario paquete constará, entre otros, de unos préstamos de 400 millones de euros de parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 90 millones del fondo fiduciario creado por la Comisión Europea y diez Estados miembros, así como la cooperación en curso de 67 millones para el periodo 2014-2017. Además, incluye 12 millones de euros desembolsados para la ejecución de cuatro proyectos de la UE respecto del «desarrollo local sostenible, la promoción de los derechos de seguro de tenencia de la tierra y el acceso equitativo a esta, la acción integral contra las minas y las radios comunitarias para la paz y la convivencia» (Deutsche Welle, 2016).

Pardo señaló que la financiación es necesaria para hacer los acuerdos sostenibles en las regiones que han sufrido el conflicto, por lo cual agradeció que Europa apoye política, financiera y técnicamente el proceso de paz y designara un enviado especial a los diálogos, Eamon Gilmore, quien ha realizado cuatro visitas al país. Según la perspectiva colombiana, sin este tipo de apoyos no se obtendría la credibilidad requerida para sortear la votación popular en que los colombianos decidirán si apoyan o no la paz, aprobando o rechazando finalmente el acuerdo definitivo con la guerrilla, para dar inicio a la etapa de posacuerdo.

Gestores de paz

En noviembre de 2014, Juan Manuel Santos anunció que va a replicar en todo el país el modelo de gestores de paz, iniciativa con más de un lustro de experiencia que a manera pedagógica ya fue impulsada en Bogotá por el exalcalde Gustavo Petro. Ese mes Santos acompañó la ceremonia de graduación de 1.000 gestores de paz en la capital, lo que convierte al proyecto en una de las expectativas para poder hacer pedagogía hacia el posacuerdo y el posconflicto.

Como referente encontramos que mediante decreto, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se permitió darles tratamiento especial a miembros de grupos

armados que expresaran su voluntad de paz y se comprometieran a contribuir a la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario. Esta norma fue base para fomentar hacia 2009 una generación de gestores de paz que procedían directamente del conflicto armado, es decir personas con antecedentes en la guerrilla o el paramilitarismo, constituyendo una más de las estrategias del gobierno para favorecer la pacificación del país que en ese momento se inclinaba hacia el uso de la fuerza, aunque acogiendo a quienes quisieran desmovilizarse. Este tira y afloje, entre darle la bienvenida a la vida civil a antiguos insurgentes y terroristas, darles a escoger entre el adjetivo de *desmovilizados* o el de *derrotados*, sirvió para someter a examen algunos aspectos prácticos de una posible negociación de paz como la que hoy experimenta Colombia.

Como era de esperarse, en medio de cierta polémica, personas como Olivo Saldaña, Karina y Yesid Arteta, que habían estado privados de libertad por crímenes relativos al secuestro, se convirtieron en gestores de paz, incluyendo a Arteta que se había radicado en España. La experiencia de que figuras de la guerrilla como Rodrigo Granda, de las FARC, o Francisco Galán, del ELN, legalmente pudieran fungir como gestores de paz desató un debate ante una opinión pública que le costaba entender que quienes hablaban hace poco de hacer la guerra hablaran ahora de cómo hacer la paz⁸.

Sin embargo, a pesar de las zonas grises legales de quienes en realidad se estuvieran acogiendo a una Ley de Justicia y Paz, es de notar que con el cambio de gobierno y el inicio de la negociación con las FARC, quienes criticaron el modelo de gestores de paz por acusarlo de derrotista y de excusa para ganar la guerra, o de ser un modelo contrainsurgente de desmovilizaciones individuales y simbólicas, ahora guarden silencio cuando el proyecto se ha retomado y la búsqueda de la paz adquiere un valor, especialmente entre algunos desconcertados intelectuales de izquierda. En ese sentido el pragmatismo de Juan Manuel Santos se ha hecho una vez más palpable: a diferencia de Álvaro Uribe Santos busca no solo ser exitoso en la guerra sino también en la paz.

En cualquier caso se desprenden experiencias académicas que servirán para el posconflicto, al haber varios desmovilizados culminado diplomados como gestores de paz en la cárcel de La Picota en Bogotá, es decir llevando el plan de inclusión donde normalmente van a parar los excluidos. Por ejemplo once desmovilizados durante ocho meses bajo la dirección del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), con el apoyo de la cátedra Jean Monnet en políticas y cooperación de la Unión Europea, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), la Red Internacional de Universidades para la Paz y la Universidad Complutense de Madrid, con el patrocinio del

⁸ Véase PALOU TRÍAS, Juan Carlos: «¿Qué hay detrás de los gestores de paz», 2009, disponible en <<http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/177-iquay-detrde-los-gestores-de-paz.html>>.

Parlamento Europeo desarrollaron el diplomado «Gestor de paz, desarrollo sostenible y cooperación internacional». Este cobijó a exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, reclusos en el pabellón de Justicia y Paz, quienes recibieron sus diplomas en un acto realizado en el establecimiento penitenciario. De manera inédita se capacitó a los internos en temas de globalización, gobernabilidad democrática y participación ciudadana en el caso colombiano, negociación y resolución pacífica de conflictos, desarrollo sostenible, cooperación internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH).

De modo simbólico, pero de importancia cuando se habla de reconciliación y perdón en la sociedad colombiana, en el marco del diplomado se produjo en 2011 una declaración de perdón por parte de los promocionados gestores de paz, gesto que contribuyó a situar a las víctimas del conflicto en la agenda⁹. De esta manera esta iniciativa logró trascender el cambio de gobierno con el arribo de la presidencia de Juan Manuel Santos, lo cual fue ya contextualizado por el proyecto que gestionó el IAEE¹⁰, y que ahora en otras formas se quiere presentar de manera descentralizada como una forma de fortalecer la cultura de la paz dentro de la negociación que se realiza y con miras al posacuerdo.

Cambio de hipótesis respecto a la seguridad

El arribo del posacuerdo tiene un efecto importante respecto a la hipótesis de guerra con que en buena parte el Estado colombiano ha combatido a las guerrillas en las últimas décadas. En esencia, como lo ha señalado Alejandro Reyes (2014), la meta del posconflicto cambia la idea de que las guerrillas, por su lógica de guerra irregular, han buscado infiltrarse entre las comunidades campesinas, obreras y estudiantiles para instrumentalizarlas, y por tanto, deben ser objeto de una política de seguridad que evite sean parte del enemigo interno.

Aunque esta visión tendría algunos elementos ciertos soportados por la experiencia y los servicios de inteligencia, esta lectura obvia el hecho de que muchísimas comunidades ofrecieron resistencias contra la manipulación y opresión de los grupos armados. La hipótesis anterior, que prevaleció en la práctica, si bien fue consistente para enarbolar una doctrina de seguridad, contribuyó indirectamente a tratar a las comunidades rurales como parte del problema, y a la generación de las autodefensas y finalmente el paramilitarismo, llevando al límite la explicación de asociar comunidades y sub-

⁹ Véase IAEE: «Gestores de Paz: Petición de Perdón», 2011, disponible en <<http://www.iaee.eu/noticias/noticia28.htm>>.

¹⁰ Véase IAEE: «Declaración Proceso de Paz y nueva política gubernamental», 2010, disponible en <http://www.iaee.eu/material/Declaracion_Proceso_de_Paz_y_nueva_politica_gubernamental.pdf>.

versión. En consecuencia, ayudó a desatar la práctica del terror mediante la realización de masacres y asesinatos de líderes sociales para conseguir dominio territorial.

Esta hipótesis de guerra, compartida por las élites territoriales que eran amenazadas por las guerrillas, les permitió obtener respaldo público y privado a su seguridad, y extender sus propiedades a medida que el desplazamiento campesino y la depresión de los precios en áreas en conflicto hacían que fueran irrecuperables para los ciudadanos de menos recursos. Como lo recuerda Reyes, la consecuencia más grave de esta hipótesis de guerra fue la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado, que además abrió la puerta para alianzas no oficiales y peligrosas entre sus agentes y actores ilegales.

Esta lección ya la habría aprendido el país y corregir sus consecuencias es parte esencial del posconflicto: «cuando la fuerza pública comparte el monopolio de la fuerza también está entregando al resto del Estado, y la población señalada por los aliados sociales como enemiga o colaboradora del enemigo queda desprotegida e indefensa como blanco fácil de la guerra. El daño social es tan profundo que tarda años restablecer la confianza entre vecinos, en comunidades donde la mitad lleva el estigma de apoyar a guerrillas y la otra mitad de apoyar a paramilitares, cuando lograron resistir al desplazamiento» (Reyes, 2014).

Por estas razones, las acciones del posacuerdo transforman la hipótesis de guerra. Ya no serán las élites territoriales –antiguas o emergentes–, las aliadas privadas de la seguridad nacional, ni la población civil el resguardo de la subversión, susceptible de ser tratada con hostilidad, sino que la fuerza pública será la garante de los derechos ciudadanos, con prioridad de la población vulnerada por el conflicto. La actualización de los derechos de las víctimas requiere entonces la confrontación de las élites territoriales en los casos en que se hayan beneficiado del despojo de tierras. Por eso la restitución de tierras es uno de los temas centrales más sensibles para la reconciliación, la puesta en práctica de una reforma agraria aplazada desde tiempos incluso previos a la aparición de las FARC, dependiendo ahora su éxito de que se realice pacíficamente.

Recordemos que Colombia es uno de los países que más exiliados y refugiados ha producido, teniendo en la actualidad unos 6 millones de personas que aún padecen desplazamiento interno (ACNUR, 2015). Esta población, víctima de la violencia, desea en buena medida volver a sus lugares de origen, es decir, a las zonas rurales afectadas por la violencia. De esta manera, «en la medida que la fuerza pública neutralice la amenaza de violencia privada contra la restitución de tierras, en una nueva alianza con el campesinado, aumentará su legitimidad y pondrá en práctica el nuevo paradigma de la seguridad en el posconflicto, que es poner la seguridad al servicio de los derechos de todos, empezando con los de la población rural abandonada por el Estado» (Reyes, 2014).

Ciudades, territorios y posconflicto

Una meta que subyace entonces para el gobierno en el posconflicto es no solo la reconciliación nacional con quienes abandonen las armas, sino la estabilización de los territorios donde la guerra se ha desarrollado. Por ello, Colombia cuenta ahora con el Ministerio del Posconflicto, encabezado por el excandidato presidencial Rafael Pardo, uno de los hombres de confianza del presidente Juan Manuel Santos, el cual busca evitar que después de la firma de los acuerdos los municipios tengan más violencia que la que ya han padecido y, por el contrario, se conviertan en focos de desarrollo.

El posconflicto para las ciudades y territorios debe implicar para el citado ministerio tres aspectos: primero, más seguridad y menos violencia. Segundo, la paz debe conducir a reducir la siembra de coca y la ilegalidad. Tercero, la paz debe significar algo nuevo aun para los colombianos que no han vivido el conflicto. Esos son los retos de la construcción de paz, hacerla (como se ha señalado, negociar y avanzar en el posacuerdo) y construirla (posconflicto, en el que debe involucrarse todo el país en los próximos años).

Para desarrollar estas ideas, el Ministerio del Posconflicto ha propuesto el plan Estrategia de Respuesta Rápida (ERR), con el fin de generar confianza en la implementación de los acuerdos junto a las autoridades territoriales, contemplando 4 aspectos básicos con 18 puntos. Las etapas son: *Atención Socioeconómica, Gobernabilidad y Conflictividades, Justicia Transicional y Justicia y Seguridad*. Si estas etapas llegasen a desenvolverse positivamente, la percepción que tienen los colombianos debería cambiar en torno a la violencia que se ha sufrido. Hay que aclarar, eso sí, que una es la que tienen los ciudadanos que han afrontado el conflicto directamente, la que reside en municipios en los cuales va a haber desmovilización de las FARC con unas necesidades acuciantes en términos de seguridad y de justicia. Por otro lado está la de quienes viven en municipios en los cuales no todos los actores ilegales se van a desmovilizar. Son municipios o regiones que tienen una importancia grande en las economías ilegales y que temen por retaliaciones. Y finalmente la de la gran mayoría de gente del país que solo tiene el conflicto como referencia de lo que ve en los medios de comunicación. Sin importar cuál sea el caso, la paz sería visible y debería significar algo para todos, no solamente para quienes se desmovilizan.

Desde el punto de vista de una política pública, Pardo anunció que se definió un marco institucional en el cual funciona el Ministerio del Posconflicto articuladamente con el Ministerio de Agricultura, desde tres agencias: de tierras, desarrollo rural y desarrollo territorial. Dentro de esta agencia está el fondo que recoge los montos de la cooperación internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, Unión Europea y Naciones Unidas. Con el fin de asignar un plan de respuesta rápida, se retiró la línea de separación que implicaba decir qué municipios eran de posconflicto y cuáles no. Para el gobierno en general toda Colombia hace parte del posconflicto, aunque

habrá municipios donde los programas serán más intensos que otros, ninguno estará excluido.

En cuanto al mencionado apoyo de la Unión Europea, la cooperación incluirá la creación de oportunidades de generación de ingresos para 650 pequeñas y medianas empresas rurales, financiación de proyectos de paz para radios comunitarias, asistencia para acciones de desminado humanitario e implementación del diálogo social como mecanismo de participación y restitución de tierras. Las ayudas contemplan asistencia técnica rural y préstamos por 400 millones de euros, disponibles una vez se firme el acuerdo de paz definitivo. La entrega de este apoyo económico se dará a través de cuatro grandes líneas de trabajo, con las que Europa busca apalancar las políticas del Gobierno. La primera es el apoyo al programa Desarrollo Local Sostenible en zonas marginadas de Colombia, liderado por el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales. También se entregará apoyo a través de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander (Resander), para financiar iniciativas de radios comunitarias de paz y convivencia.

Otra de las líneas que canalizarán recursos será la asistencia técnica a la Dirección de la Acción Integral contra Minas, organismo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia. El cuarto mecanismo de entrega de recursos será una alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de promover el fortalecimiento de la plataforma de diálogo social a nivel nacional y «mejorar las condiciones de tenencia y gobernanza de la tierra». De esta forma, la Unión Europea consolidaría los acuerdos establecidos con Colombia para desarrollo local sostenible en las zonas más afectadas y promovería las garantías de derechos de propiedad de la tierra y su acceso equitativo en áreas nacionales protegidas y de desminado humanitario, lo cual iría en línea con el primer aporte del organismo a la consolidación de la paz realizado el 23 de marzo, en el cual aprobó el Fondo Fiduciario para el Posconflicto, dirigido al desarrollo rural con proyectos productivos con un enfoque territorial (*El Tiempo*, 2016).

Desde el punto de vista administrativo, se deben garantizar los presupuestos para llevar a toda Colombia del conflicto y el posacuerdo al posconflicto, lo que en definitiva no implica solo el acuerdo con las FARC, sino una serie de iniciativas generales para integrar al país y a sus regiones, con el fin de llevar la presencia del Estado a zonas donde jamás se ha garantizado la seguridad ciudadana ni la seguridad humana. Por ello, será vital considerar que el plebiscito que refrendará el proceso de paz le dará al presidente facultades para modificar el presupuesto y el plan de desarrollo, según las necesidades de establecer un país que por fin deje la diferenciación entre zonas rojas y no rojas, o de conflicto y no conflicto. El Ministerio del Posconflicto, que tiene a su cargo la coordinación de la seguridad ciudadana y la lucha contra las bandas criminales, también le apunta a reducir la ilegalidad en las regiones no solo con el apoyo de la fuerza pública, sino también con

la formalización en la actividad económica. Este requerirá así de incentivos tributarios más que de nuevos impuestos para atraer la inversión nacional y extranjera a varias zonas del país, para que la actividad económica se distribuya adecuadamente en el territorio. Esta sería la vía para que los empresarios se sumen de una vez por todas al posconflicto.

Frente al desafío que presume un país tradicionalmente centralizado, para que en realidad la acción del posacuerdo se descentralice, se plantea una unidad ejecutora para algunos programas, pero otros serían desarrollados por las mismas entidades en coordinación con mandatarios locales. La idea es fomentar a las regiones, no al nivel central. El Ministerio del Posconflicto ha manifestado que trabajará con mecanismos de consulta y participación comunitaria, así como con autoridades regionales y establecidas. Para ello será vital la relación que pueda forjarse con los nuevos gobernadores sobre las prioridades en la construcción de la paz, ya que ellos vienen ejerciendo por voto popular después de la Constitución de 1991 la representación a nivel de la rama ejecutiva en los departamentos. Los gobernadores elegidos a futuro serán los primeros mandatarios regionales que no tengan el conflicto como la principal preocupación, por lo cual tiene que contemplarse formalmente en los planes de desarrollo, seguridad y convivencia que el conflicto queda atrás, produciendo un cambio tangible para el país, lo que según Rafael Pardo equivaldría a incorporar a otra Colombia que prácticamente ha estado apartada del proyecto de nación.

Los territorios especiales de la guerrilla

Las controversias no se han hecho esperar, entre las posibilidades de avanzar en una verdadera reforma agraria, aplazada durante décadas, frente a los intereses de los terratenientes y la reingeniería que pueda asumir la propia guerrilla convertida en actor político democrático. Las FARC, en torno al punto de negociación sobre el fin del conflicto, han propuesto la creación de territorios especiales para la paz. La pregunta que surge es si estas zonas donde la guerrilla ha tenido habitual presencia e influencia llegarían en verdad a ser cobijadas por las propuestas de desarrollo del gobierno, o si de alguna manera permanecerían bajo su control.

La realidad apunta a que esta iniciativa de las FARC busca áreas específicas para fortalecerse y emprender el camino político sin armas en sitios donde históricamente han tenido influencia, con el fin de avanzar como un partido político corriente que tenga unas bases sociales más o menos sólidas. Desde Cuba, la delegación de paz de la guerrilla expresó que esta iniciativa y las otras nueve presentadas en el denominado Plan Paz que se ha discutido en la mesa de negociación, «comprenderá las definiciones de política económica, social y ambiental necesarias para su implementación. Asimismo, contendrá el diseño de la institucionalidad especial de paz requerida para su cumplimiento».

Estos «territorios especiales» para la paz serían entonces los bastiones que la guerrilla utilizaría, una vez dejen las armas, para sentar sus intereses territoriales y buscar proyección social, política y económica. Visto de este modo, se trataría de la refundación de su discurso político en el posacuerdo, tal como lo han hecho otras guerrillas en el pasado en El Salvador (FMLN), en Uruguay los antiguos tupamaros (MLN-T) o en la propia Colombia el M-19 (Cepeda Jiménez, 2009). La retórica territorial de las FARC no es otra cosa que aterrizar como fuerza social y política desde regiones como el sur del Meta, o zonas de los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca y Norte de Antioquia. Las FARC desarrollarían sus proyectos de consolidación cuando inicien su nueva vida pública, para buscar luego extenderse a municipios vecinos mostrando sus nuevas ideas de posconflicto, aspirando llegar en el mediano y largo plazo a las grandes ciudades donde ya vendrían realizando actividades de proselitismo político.

Esta es la razón por la que se ha comentado que desde el secretariado de las FARC se ha dado la orden a todas sus estructuras armadas de comenzar a estudiar sus estatutos, suspender cursos militares y dedicarse a la formación política y cultural. La propuesta, que según la guerrilla llevaría a una paz duradera, es vista paralelamente con desconfianza, no solo por quienes dudan de la capacidad de construir el posconflicto, sino de los que cuestionan las verdaderas intenciones de que la guerrilla quiera realmente construir la paz o esté apostando por respetar los parámetros de la democracia liberal constitucional.

Los desafíos ambientales de la paz

A diferencia del gobierno, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia favorece un enfoque diferencial para concentrar el posconflicto en áreas que tradicionalmente han sido más afectadas, enfocándose en el medio ambiente, que hasta hace poco no era tenido en cuenta en la agenda de desarrollo del país para la construcción de paz. Según las agencias del Sistema de Naciones Unidas, Colombia cuenta con 125 de 1.122 municipios donde el posconflicto se concentrará. Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en Colombia, que presentó en 2015 el informe *Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia, insumos para la discusión*, afirmó que se hizo un análisis de municipios de mayor prioridad según la presencia de las FARC, de acciones armadas, necesidades humanitarias, pobreza y capacidades locales (ONU-Colombia, 2015).

Los departamentos y municipios donde deberá priorizarse y concentrarse según Naciones Unidas el posconflicto son: Cauca (20 municipios); Antioquía (15 municipios); Caquetá (14 municipios); Chocó y Nariño (con 12 municipios cada uno); Norte de Santander, Putumayo y Meta (con 8 municipios cada uno); Valle (6 municipios); Tolima (5 municipios); Arauca y Huila (4 municipios

cada uno); Bolívar, Casanare, Córdoba y Guaviare (con dos municipios cada territorio), y La Guajira (con un municipio). El documento de la ONU hace cuatro recomendaciones que deben abordarse de cara a un posconflicto en Colombia:

- (1) Avanzar en procesos de ordenamiento territorial que tengan como principal fin la construcción de paz sostenible y la concertación entre los gobiernos, los sectores productivos y las comunidades.
- (2) Ver lo rural más allá de lo agropecuario y desarrollar modelos locales de aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad de Colombia y de los servicios que presta.
- (3) La necesidad de analizar la actividad extractiva –especialmente la minería– y sus implicaciones en la construcción de paz.
- (4) Apoyar a la institucionalidad ambiental en el fortalecimiento de capacidades para la construcción de paz.

El conflicto ha causado daños al medio ambiente por la siembra de minas antipersona, episodios de violencia en áreas protegidas, la deforestación provocada por la expansión de los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal¹¹. Pero, paradójicamente, muchos de los lugares mejor conservados están en áreas remotas donde, como consecuencia del propio conflicto, el desarrollo ha sido limitado. Esos territorios serán grandes protagonistas en la implementación de las acciones que acompañan la construcción de la paz (desarrollo de infraestructura, apertura de mercados, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, etc.) por lo que es indispensable tener en cuenta una gran variedad de aspectos de la sostenibilidad ambiental, tanto en la planificación como en la implementación de los acuerdos.

Según el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, para que el posconflicto se convierta en una gran oportunidad para introducir modelos sostenibles de desarrollo, se requiere aprovechar las oportunidades que el medio ambiente ofrece para la construcción de la paz. Ello implica: utilizar sosteniblemente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ella presta como alternativa para diversificar los medios de vida locales; promover prácticas ancestrales y tradicionales para el uso del patrimonio natural; fortalecer el ecoturismo y el pago por servicios ambientales, entre otras posibilidades.

Esto significa redefinir las relaciones de la ciudad con el campo para que sean más justas, pensar lo rural más allá de lo agropecuario, buscar un desarrollo local sostenible con alta participación e identificar experiencias replicables de aprovechamiento del patrimonio natural con víctimas del con-

¹¹ Según Luise Lowe (2015), existe una clara relación entre la extracción minera como una nueva fuente de conflicto en Colombia, lo cual se debe a un controvertido modelo minero-extractivo que presenta un auge desde el gobierno de Álvaro Uribe, y el que además se ha agudizado con la proliferación de la minería ilegal a la que han estado involucradas tanto las guerrillas como diversos actores ilegales.

flicto y excombatientes. Otros países experimentaron la degradación de su patrimonio ambiental en periodos de posconflicto. En Colombia la situación puede ser distinta: existe el reto de construir una paz que potencie las características ambientales, que reconozca las oportunidades y las limitaciones que impone el cambio climático y que se construya con base en modelos «verdes» de crecimiento. Si todos estos ideales que propone el Sistema de Naciones Unidas en Colombia se llegasen a cumplir, el país avanzaría de paso en su seguridad alimentaria, un tema que viene siendo una preocupación en el nuevo milenio.

Los argumentos son elocuentes: 90% de los municipios con prioridad alta en el posacuerdo tiene alguna figura de protección (Parque Nacional o reserva forestal); 8 municipios del país tienen hasta el 100% de su área bajo alguna figura que regula su uso; el 80% de la población ya vive en municipios que pueden estar afectados por fenómenos de sequía. Recordemos que los Parques Nacionales Naturales contribuyen con el 11,3% de la oferta hídrica nacional, recurso valioso del cual el 48% de las tierras ya se encuentran afectadas por erosión, condición que aumenta riesgos de deslizamientos y pérdida del capital básico para una reforma rural integral. Y finalmente: el 50% del territorio del país está cubierto por bosques y otros ecosistemas relevantes, no solo para Colombia sino para la regulación del clima mundial. Si estos temas no se consideran desde ya en la agenda del posacuerdo, existirá un enorme déficit en términos ambientales para la construcción del posconflicto.

Nuevo rol de la fuerza pública

Los anteriores planes para la agenda del posacuerdo y el posconflicto suenan muy bien en la teoría. Pero, aun si no hay guerra, surgen preguntas como: ¿cuál debe ser el papel de la fuerza pública de Colombia en tiempos de paz? ¿Si continúan existiendo actores ilegales en varios de los territorios colombianos, el Estado está preparado para combatir esas nuevas amenazas? Estas son, más que preguntas, dudas que rondan a los colombianos y a muchos observadores externos, y que desde ya vienen siendo un eje central de la próxima campaña presidencial para el año 2018 cuando Juan Manuel Santos entregue su mandato.

De entrada, el presupuesto central que sale a la superficie es que de concretarse el proceso de paz con las FARC, y más ante una eventual negociación con el ELN, la fuerza pública (Fuerzas Militares –Ejército, Armada y Fuerza Aérea– más la Policía Nacional) sufriría algunos cambios, concentrándose por primera vez en años en el combate de actividades delictivas por encima de las del conflicto armado. Iniciaría entonces un proceso de transformación para convertirse en un aparato armado diferente al que conoce hoy el país. Estos temas, ya abordados por el presidente y el Ministerio de Defensa, han puesto sobre la mesa escenarios y nuevos roles como la vigilancia a la mi-

nería ilegal, el control del medio ambiente, la asistencia en desastres naturales, e incrementando el esquema de seguridad fronteriza con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá.

Ante la insinuación de que la fuerza pública debiese de manera paralela a las FARC reducir su tamaño se han despertado varias inquietudes. Primero, que esa posición, promocionada especialmente por la guerrilla, desconoce que ella es la expresión del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado colombiano. Segundo, sale a flote la necesidad de mantener la buena relación entre el Ejecutivo y el sector de defensa, el cual, aunque leal a su misión constitucional, se habría sentido mucho más cómodo durante la presidencia de Álvaro Uribe que bajo la de Juan Manuel Santos. Aquí hay que señalar, que, más allá del giro político, una realidad sigue siendo cierta: indudablemente el debilitamiento de la guerrilla por la acción de la fuerza pública es el que contribuyó a allanar el posconflicto.

Pero incluso llegando a un acuerdo de paz persistirán dos amenazas centrales para el país que deberán ser atendidas con firmeza: el narcotráfico y la eventual transformación parcial de miembros de la guerrilla en bandas criminales. Una situación que en Centroamérica se ha expresado en la presencia de pandillas conocidas como «maras», quienes reflejan el fracaso en el posconflicto para incluir socialmente a jóvenes y otros sectores sociales que infortunadamente siguen amenazando la convivencia y la seguridad¹². Esta realidad ciertamente ya se está enfrentando, especialmente ante el denominado «posparamilitarismo», como lo ejemplifica el Clan Úsuga y otras organizaciones criminales narcoterroristas que han desafiado al Estado en los últimos meses y que hasta han llegado a reclamar cierta atención política, ante lo cual el gobierno ha dicho que responderá solo con el uso legal de la fuerza.

En todo caso suponer la reducción de la fuerza pública, acorde al nuevo contexto del plan Paz Colombia que deja atrás al Plan Colombia, es algo por considerar, pero no en lo inmediato y mucho menos en función de una exigencia de las FARC. El Estado, además, ha sentado su posición al resaltar que ni el marco político ni el esquema del país están en discusión en La Habana. Pero vale la pena pensar cómo sería a futuro el reparto de funciones entre militares y policías, pues en la medida que las fuerzas militares adquieran un nuevo perfil, la policía deberá tener un incremento de personal para brindar seguridad ciudadana en el posconflicto y un nuevo tipo de relación con el Ministerio de Defensa, alejándose del uso directo de la fuerza al que se ha visto obligada por cuenta de la violencia.

En cuanto a los procesos de paz en Centroamérica, concretados entre las décadas de 1980 y 1990 y que suelen ser citados, hay que recordar que allí sí hubo acuerdos sobre una reforma estructural completa del sistema de

¹² Véase Hernández-Anzora (2016): «Las maras y la nueva guerra salvadoreña».

seguridad, pero teniendo en cuenta que se trataba de contextos de transición política, pasando de sistemas autoritarios y hasta con violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado a regímenes democráticos. Sin embargo hay que admitir que en Colombia se han presentado también violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, como lo ejemplifica el escándalo de los «falsos positivos», en el que se hicieron pasar por bajas de la guerrilla por parte del Ejército a jóvenes inocentes durante la presidencia de Álvaro Uribe y cuando el ministro de defensa era el propio Juan Manuel Santos, pero esto no implica un escenario en el que se tenga que desmontar todo el aparato de seguridad y rehacerlo. Acudiendo al principio de no repetición de la violencia que aspira concretar Colombia, bastaría una transición cuidadosa, no inmediata en el posacuerdo, en la medida que haya que reformar lo que ya no se ajuste a la realidad de un país sin un conflicto armado interno que construye el posconflicto.

En otras palabras, todo el potencial humano y tecnológico que está en manos de la fuerza pública se pondría más al servicio del desarrollo del país que a la confrontación interna. Además la fuerza pública colombiana, una de las más entrenadas y con mayor experiencia en conflictos directos de baja intensidad y enfrentamiento al terrorismo, tendrá la posibilidad de seguir ofreciendo a otros países su amplio conocimiento en la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico, es decir, proyectando un nuevo rol de cooperación por fuera de sus fronteras. Esto es lo que ha denominado Henry Cancelado (2015, 164) como el nuevo rol de la fuerza pública, en el contexto de la nueva estrategia y doctrina de defensa con miras al posconflicto que impactará la política exterior del país¹³.

En todo caso, el Ministerio de Defensa ha revelado que se ha buscado un balance en cuanto al fortalecimiento de su infraestructura, a la par que se invierte en educación, elementos que inciden en mantener en alto la moral de la fuerza pública. Por ejemplo, el campo militar ha crecido en los últimos 13 años, y puntualmente en 2014 se invirtieron recursos para la compra de 16 helicópteros de última generación, ocho aviones de transporte, 60 vehículos blindados, 2 submarinos, 20 lanchas de control fluvial, buques y ocho aerodeslizadores, así como 11.000 visores nocturnos y 24.500 miras de combate. Paralelo a la inversión en tecnología y modernización de equipos militares, el Estado colombiano destinó en el proyecto educativo para la fuerza pública desde el inicio de los diálogos en Cuba (2012-2014) 93.738 millones de pesos, con la finalidad de elevar su nivel de preparación. Aunque el norte de las Fuerzas Armadas es mantener la soberanía y la seguridad en el país, dice

¹³ Por ejemplo ampliando la participación de Colombia en el marco de la OTAN, ayudando a modelar el ambiente internacional de seguridad, aumentando la interoperabilidad con terceros países, proporcionando adiestramiento militar y policial, coordinando la asistencia militar y cooperando con los gobiernos de los países clave. Se calcula que más de 5.000 hombres del Ejército podrían estar destinados a participar en diferentes operaciones de paz a nivel internacional. Respecto a la OTAN, véase Treviño (2010).

el general (r.) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), estas deben tener en cuenta que su nuevo rol estará más enfocado en el servicio social (Macías, 2015). Sobre esto es de esperar que el servicio militar, más allá de su obligatoriedad, pueda canalizarse en formas de servicio social.

Conclusión

Uno de los principios más importantes del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es el principio de no repetición. Según este, se supone que la nueva etapa posacuerdo que inauguraría Colombia impedirá la vuelta al contexto violento, el cual ha permitido durante cerca de medio siglo la prolongación de una profunda crisis humanitaria. En ese sentido, el posacuerdo es una ventana al ejercicio real del Estado de derecho –o como se promocionó «Estado social de derecho» en la Constitución de 1991–, donde los derechos humanos deben adquirir una dimensión central.

Por ello, como se insistió, se hace importante distinguir los conceptos de *posacuerdo* y *posconflicto*. Dentro de la necesaria temporalidad que adquieren estas palabras, el posacuerdo hace referencia al inmediato periodo que se abre para Colombia tras la firma del esperado acuerdo de paz con las FARC, configurando a partir de allí una nueva serie de políticas públicas que tendrán como novedad la finalización de una situación conflictiva directa respecto a este grupo insurgente.

El posacuerdo implica entonces la reconfiguración de la agenda política de gran parte del país en el corto y mediano plazo, abarcando de manera coordinada los campos de la seguridad, la justicia, la economía y la cooperación. Por su parte el posconflicto, del cual se habla genéricamente, implica enrutar el país, partiendo de los *policies* del posacuerdo, hacia la construcción de la paz o *peacebuilding*, en una perspectiva que va más allá del mediano término y se proyecta en el largo plazo. En este sentido, Colombia debería pasar del alcance de una valiosa pero insuficiente paz-negativa, a una paz-positiva que estructuralmente revierta las condiciones de violencia que le han impedido su desarrollo.

Desde el punto de vista de los nuevos retos para la seguridad, Colombia enfrentará sin duda una nueva definición de sus prioridades, que tras décadas no estarán condicionadas principalmente por el combate a la insurgencia armada, sino por el uso estratégico de la inteligencia en diferentes frentes. Esta situación de hecho ya se viene experimentando, desde los procesos de paz parciales que ha realizado la nación en los pasados lustros, y que dieron como puerto principal la redacción de la Constitución de 1991. Esto marcha sobre el diagnóstico de que en la actualidad las velocidades históricas del país implican zonas donde el conflicto está presente, otras en las que el posconflicto se ha venido adelantando o experimentando, y otras partes donde el conflicto es prácticamente marginal.

En primera instancia, la guerrilla dejará de ser una amenaza directa, y más suponiendo que en un futuro el ELN se sumará –aunque con su propia agenda de negociación– a las iniciativas de paz de las FARC, lo que obliga a la fuerza pública (Fuerzas Armadas y policía) a reorientar sus tareas. En este sentido se hace importante recordar que las amenazas a la seguridad continuarán existiendo, no solo a partir de los posibles sectores de miembros de la guerrilla que no se desmovilicen efectivamente para reintegrarse a la vida civil, sino por la existencia de organizaciones criminales que aún afectan a Colombia, como los grupos de narcotraficantes, las denominadas bandas criminales de origen posparamilitar o los enclaves privados de minería ilegal, contrabando y otras actividades delictivas.

Contra estas amenazas no cabe duda que Colombia no podrá bajar la guardia y se deberá seguir luchando en todos los niveles. Por ello se debe resaltar que el país no presupone por ahora un desmonte del pie de fuerza de la fuerza pública en el corto plazo, sino una transitoria consolidación de la seguridad y a futuro el incremento de misiones en temas ambientales, de desarrollo estructural, cuidado de fronteras e incluso en misiones de cooperación a nivel internacional.

En este marco la desmovilización efectiva de las FARC es uno de los retos mayores por enfrentar. Requiere se cumplan y respeten los puntos de negociación acordados en La Habana, se ratifiquen mediante votación popular por los colombianos, para poder luego la guerrilla hacer el tránsito eventual de una fuerza insurgente en una fuerza política legal, tal y como está especificado en el punto de participación política que contempla el acuerdo. Esto no significa que todos los cerca de 8.000 militantes de las FARC vayan a desarrollar una carrera política partidista, sino que su desmovilización deberá ir de la mano de los planes de desarrollo, educación y bienvenida a la vida civil que ya se contemplan para evitar las problemáticas experimentadas con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, o los que han presentado países de Centroamérica respecto a grupos de pandillas y delincuentes privados.

Estos temas no presuponen una fácil solución, pues a pesar de que durante la negociación con las FARC el conflicto armado ha ofrecido una disminución inédita de su intensidad violenta en décadas, continuará mediando una alta polarización entre los sectores partidistas liderados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la oposición rígida que campea el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su bancada parlamentaria. En esa medida, el desarme, la reinserción de la guerrilla y su participación política serán los escalones inevitables de un mismo proceso, que si llegasen a fracasar le darán la razón a Uribe y a los críticos del proceso de paz.

Lo anterior obliga a que Colombia, si consolida el proceso de paz, deberá de inmediato proceder a consolidar la presencia del Estado en todo el territorio, no solo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como se ha venido avanzando desde la presidencia de Álvaro Uribe –en ese entonces

bajo el lema de la «seguridad democrática», sino de la seguridad humana. El posconflicto implica al gerenciamiento adecuado de varios aspectos que ofrecen una oportunidad inédita de descentralizar la paz. En este sentido encontramos que la hoja de ruta de la paz implica un gerenciamiento inédito de los territorios nacionales, en las zonas campesinas y de montaña donde la guerrilla fortaleció su presencia, para generar una gobernabilidad orientada al desarrollo.

Se prevé que la relación entre seguridad y desarrollo económico será uno de los aspectos vitales que definirán si Colombia se queda estancada en el posacuerdo, o si de verdad construye su posconflicto. Por estas razones no solo el Estado y la clase política deberán repensar su actuar, sino la sociedad civil, el sector privado y las alianzas en materia de cooperación internacional, como lo señalan ya el plan Paz Colombia de Estados Unidos o los amplios programas de respaldo financiados por la Unión Europea, además de Naciones Unidas y su acuerdo de verificación del acuerdo, que darían un espaldarazo definitivo a la paz.

Por último, pero no en sentido menor, los retos en la seguridad del posacuerdo deberán cobijar a las víctimas en el principio de no repetición señalado. Ellas dejarán de ser meros sobrevivientes de la violencia a ciudadanos reconocidos desde su tragedia. De manera simbólica, Colombia pone por primera vez así una Ley de Víctimas y un proceso de justicia transicional, acompañado de reparación, verdad y memoria histórica, que será pieza clave para construir el posconflicto. Allí podrán participar todos los colombianos interesados, como lo demuestra la experiencia germinal de los gestores de paz y los debates públicos sobre a dónde se quiere orientar el país y cómo se reconstruye el tejido social. La seguridad deberá entonces ser garantizada tanto para las víctimas como para los antiguos victimarios, y por supuesto para todos los ciudadanos, ofreciendo una perspectiva de reconciliación que para Colombia, más que una loable meta, será una necesidad.

Bibliografía

- ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. *El desplazamiento de población por guerras y persecución alcanza el nivel más alto jamás registrado*, 2015. Disponible en <<http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/el-desplazamiento-de-poblacion-por-guerras-y-persecucion-alcanza-el-nivel-mas-alto-jamas-registrado/>>.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT KRIEGURSACHENFORSCHUNG (AKUF). Hamburg: Universität Hamburg. Disponible en <<http://www.AKUF.de - www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/sozialwissenschaften/forschung/akuf/>>.
- CANCELADO, Henry. «La política exterior y el nuevo rol de las FF. AA. en el contexto de la nueva estrategia y doctrina de defensa con miras al posconflicto». En Eduardo Pastrana, y Hubert Gehring (2015): *Política exterior*

- colombiana. Escenarios y desafíos en el posconflicto*. Bogotá – Colombia: Pontificia Universidad Javeriana – Fundación Konrad Adenauer. Pág. 164.
- CEPEDA JIMÉNEZ, José Alejandro. *Proceso de paz y desarrollo democrático institucional en Colombia: de la insurgencia armada a la actividad representativa partidista del ex grupo guerrillero M-19 en la Constitución de 1991*. Memoria de Investigación-Especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
- CEPEDA JIMÉNEZ, José Alejandro. «Conflict Resolution, Political Inclusion, and Party Systems: The Cases of Colombia (M-19), El Salvador (FMLN), and Uruguay (Tupamaros) in Compared Perspective». Chile: International Political Science Association (IPSA) - XXI World Congress of Political Science, 2009. Texto en castellano disponible en <<http://paperroom.ipsa.org/papers/view/1728>>.
- CEPEDA ULLOA, Fernando. «El marco jurídico para el proceso de paz en Colombia». Madrid: Frida - A European Think Tank For Global Action, 2005. Disponible en <<http://www.fride.org/publicacion/107/el-marco-juridico-para-el-proceso-de-paz-en-colombia>>.
- CEPEDA ULLOA, Fernando. «Colombia: Democratic Security and Political Reform», en Domínguez/Shifter (2008), Part III – Country Studies, 2008.
- COSOY, Natalio. «Barack Obama anuncia US\$450 millones de ayuda para plan Paz Colombia», disponible en *BBC Mundo*, 2016: <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160203_colombia_obama_anuncio_plan_paz_nc> (2016/02/05).
- DEUTSCHE WELLE. «UE dará 575 millones de euros al posconflicto en Colombia», 2016. Disponible en <<http://www.dw.com/es/ue-dar%C3%A1-575-millones-de-euros-al-posconflicto-en-colombia/a-19285491>>.
- EL MUNDO. «Liberada la periodista Salud Hernández-Mora: “El secuestro ha sido un error gravísimo del ELN”», 2016. Disponible en <<http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/27/5748b5e022601d09788b4597.html>>.
- EL TIEMPO. «Tierras, primer punto de la agenda con FARC», en *El Tiempo* (05/09/2012, pág. 3), disponible en <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12194473>>.
- EL TIEMPO. «La Unión Europea anunció más ayuda para posconflicto», disponible en <<http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/apoyo-economico-de-europa-para-el-posconflicto-en-colombia/16604247>> (05/26/2016).
- FISAS, Vicenç. *Procesos de paz y negociación en conflictos armados*. Barcelona: Paidós, 2004.
- GALTUNG, Johan. *Violence, Peace, and Peace Research*, en *Journal of Peace Research*. Vol. 6, nº. 3. Págs. 167–191. Oslo: International Peace Research Institute, 1969. Disponible en <<http://www.jstor.org/pss/422690>>.

- GEHRING, HUBERT, CUERVO Margarita. *Colombia: un largo y difícil camino hacia la paz*. En *Länderbericht*, mayo 2014. Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá. Disponible en <www.kas.de/kolumbien>.
- GONZÁLEZ, FERNÁN E. «¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: una mirada desde la historia», en *Colombia Internacional* n°. 58, Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Ciencia Política, Universidad de Los Andes 2003. Julio - diciembre 2003, págs. 124-157. Disponible en <<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/422/1.php>>.
- GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA (GMH). Director: Gonzalo SÁNCHEZ. *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*, 2013. Disponible en <<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-memorias-guerra-dignidad-12-sept.pdf>>.
- GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia (1958-2002)*. Bogotá: Grupo Editorial Normal 2007.
- HERNÁNDEZ-ANZORA, Marlon. *Las maras y la nueva guerra salvadoreña*. En *Nueva Sociedad* (mayo-junio 2016), disponible en <<http://nuso.org/articulo/las-maras-y-la-nueva-guerra-salvadorena/>>.
- HUNTINGTON, S. P. *The Third Wave*. London, 1991.
- IAEE, Instituto de Altos Estudios Europeos. «Gestores de Paz: Petición de Perdón», 2011. Disponible en <<http://www.iaee.eu/noticias/noticia28.htm>>.
- IAEE, Instituto de Altos Estudios Europeos. «Declaración Proceso de Paz y nueva política gubernamental», 2010. Disponible en <http://www.iaee.eu/material/Declaracion_Proceso_de_Paz_y_nueva_politica_gubernamental.pdf>.
- LOWE, Luise. «Posconflicto e impacto del modelo minero-extractivo sobre el medio ambiente». En Eduardo Pastrana y Hubert Gehring: *Política exterior colombiana. Escenarios y desafíos en el posconflicto*. Bogotá – Colombia: Pontificia Universidad Javeriana – Fundación Konrad Adenauer, 2015. Pág. 223.
- MACÍAS, Javier Alexander. «La comunidad será la nueva misión para las Fuerzas Armadas». En *El Colombiano*, 2015. Disponible en <<http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/tejido-social-la-nueva-mision-de-las-fuerzas-armadas-en-el-posconflicto-JC3136913>> (18/11/2015).
- NACIONES UNIDAS (ONU) – Colombia. «Los desafíos ambientales de la paz», 2015. Disponible en <<http://nacionesunidas.org.co/blog/2015/01/21/los-desafios-ambientales-de-la-paz/>>.
- NOHLEN, Dieter (comp.). *Democracia y neocrítica en América Latina: en defensa de la transición*. Frankfurt am Main: Vervuert – Iberoamericana, 1995.

- O'DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C. *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Johns Hopkins University Press, 1986.
- OROZCO ABAD, Iván (comp.). «Negociaciones de Paz – Los casos de Colombia y El Salvador», en *Documentos Ocasionales 67*. Bogotá: CINEP, marzo de 1993.
- PALOU TRÍAS, Juan Carlos. «¿Qué hay detrás de los gestores de paz?», 2009. Disponible en <<http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/177-iquay-detrde-los-gestores-de-paz.html>>.
- PARDO, Daniel. «Fin del conflicto: desarme, desmovilización y reintegración», en *Fundación Ideas Para la Paz (FIP)*, 2014. Disponible en <<http://www.ideaspaz.org/publications/posts/963>>.
- PARDO RUEDA, Rafael. *La historia de las guerras. Desde la conquista hasta nuestros días. Una crónica completa de las guerras en Colombia. La búsqueda de la paz desde el conocimiento de la guerra*. Bogotá: Vergara, 2004.
- PECAUT, Daniel. *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*. Vol. I y II. Bogotá: CEREC – Siglo XXI, 1985.
- PEÑARANDA, Ricardo y GUERRERO, Javier (comp.). *De las armas a la política*. Bogotá: Tercer Mundo Editores – IEPRI Universidad Nacional, 1999.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. *La seguridad jurídica*. Barcelona: Ariel, 1991.
- POSADA CARBÓ, Eduardo. *La Nación Soñada. Violencia, Liberalismo y Democracia en Colombia*. Bogotá: Norma – Fundación Ideas Para la Paz, 2006.
- RAMSEY, Geoffrey. *El Índice de Estados Fallidos de Foreign Policy se equivoca en América Latina*, 2011. Disponible en <<http://es.insightcrime.org/analisis/el-indice-de-estados-fallidos-de-foreign-policy-se-equivoca-en-america-latina>>.
- REVISTA SEMANA (2016a). «Un millonario ofrecimiento de Estados Unidos para la paz de Colombia». Disponible en <<http://www.semana.com/nacion/articulo/plan-colombia-barack-obama-y-juan-manuel-santos-celebran-la-nueva-fase/459323>> (02/04/2016).
- REVISTA SEMANA (2016b). «De Plan a Paz Colombia». Disponible en <<http://www.semana.com/educacion/articulo/un-balance-del-plan-colombia/460164>> (02/11/2016).
- REYES POSADA, Alejandro. «La hipótesis de seguridad en el posconflicto», en *El Espectador*, 4 enero 2014. Disponible en <<http://www.elespectador.com/opinion/hipotesis-de-seguridad-el-posconflicto-columna-466912>>.
- RODRÍGUEZ GARAVITO, César A.; BARRETT, Patrick S. y CHAVEZ, Daniel. *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*. Bogotá: Editorial Norma, 2005.
- SIERRA MONTAÑEZ, Alec Yamir. «El Proceso Paramilitar en Tarazá y el Bajo Cauca Antioqueño, 1997-2010». Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de Máster en Estudios Políticos. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Económicas Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) - Maestría en Estudios Políticos.

- SALAMANCA, Manuel E. *Violencia política y modelos dinámicos: un estudio sobre el caso colombiano*. Gipuzkoa: Giza Eskubideak Derechos Humanos, 2006.
- SÁENZ DE TEJADA, Ricardo. «¿Valió la pena?: guerras civiles y democracia en Centroamérica - A propósito de "Revoluciones sin cambios revolucionarios"», de Edelberto Torres-Rivas, en revista *Nueva Sociedad* n°. 240, julio-agosto de 2012.
- SÁNCHEZ, Gonzalo y PEÑARANDA, Ricardo. *Pasado y presente de la violencia en Colombia*. Bogotá: CEREC, 1986.
- SINCLAIR, Simón. ¿Qué está detrás del terrorismo? Santa Coloma Editores, 2005.
- SCHULTZE-KRAFT, Markus. *Pacificación y poder civil en Centroamérica: Las relaciones cívico militares en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el posconflicto*. Bogotá: Norma, 2005.
- TREVIÑO, José María. «El futuro de la OTAN después de la cumbre de Lisboa de 2010». *ARI*. Madrid: Real Instituto Elcano, 2010. Disponible en <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kEAjV2NDAwjQL8h2VAQARvEPuA!!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari164-2010>.
- VANGUARDIA. «Cinco ciudades de Colombia están entre las más peligrosas del mundo», 2015. Disponible en <<http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/295977-cinco-ciudades-de-colombia-estan-entre-las-mas-peligrosas-del-mundo>>.
- VOLKER, Matthias (Hrsg.). *Vom Krieg zum Frieden. Kriegsbeendigung und Friedenskonsolidierung*. Bremen: Edition Temmen, 1995.
- WIELAND, Carsten. «Diez tesis sobre el cambio del conflicto en Colombia». En *Länderbericht*, noviembre 2008. Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en <www.kas.de/kolumbien>.
- ZINECKER, Heidrun. *Kolumbien – Wie viel Demokratisierung braucht der Frieden?* Frankfurt am Main: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), 2002.
- ZINECKER, Heidrun. «Regimewechsel ohne Pfadwechsel? – die unvollendeten Transitionen in Kolumbien und El Salvador», en BENDEL Petra; CROISSANT Aurel y RÜB FRIEDBERT W. (Hg.): *Zwischen Demokratie und Diktatur: Zur Konzeption und Empirie demokratischer Grauzonen*. Opladen: Verlag Leske + Budrich, 2002. Págs. 261-282.
- ZULUAGA NIETO, Jaime. «De guerrillas a movimientos políticos (Análisis de la experiencia colombiana: el caso del M-19)», en Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (comp) *De las armas a la política*. Bogotá: Tercer Mundo Editores – IEPRI Universidad Nacional, 1999.